

Bolivia: entre populismo y democracia

Roberto Laserna

El artículo describe el contexto histórico y sociocultural de la reciente crisis boliviana. Los conflictos cada vez más álgidos de los últimos tiempos, que ponían en evidencia una creciente brecha entre los progresos de la modernización económica y las demandas de una población anclada en una imagen del Estado perteneciente al pasado, no sirvieron como advertencia para que los partidos y la clase política asumieran el papel de referentes requerido por las circunstancias. Ha terminado de aflorar una fuerte tendencia conservadora y populista que amenaza lo que debería ser una etapa de modernización democrática.

La reciente «guerra del gas» que forzó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no es un evento aislado ni espontáneo. Su antecedente más claro es otro evento de igual nomenclatura bélica, la «guerra del agua»¹. Ambos hechos tornan visible un conflicto que no ha concluido, gestado por la emergencia de un nuevo movimiento populista, aunque tiene raíces profundas en la cultura polí-

tica boliviana, y de orientación conservadora, en la medida en que los diversos actores agrupados en él buscan rescatar el pasado para enfrentar lo que consideran amenazas de la globalización y del capitalismo. Este conflicto ha puesto en riesgo la democracia, esencial para consolidar la apertura y modernización pero irrelevante para este movimiento. Y ocurre a pesar de la orientación progresista y los positi-

Roberto Laserna: investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social - Ceres, y docente de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, y de Princeton University, Nueva Jersey.

Palabras clave: crisis, proceso político, tendencias, Bolivia.

1. V. «El conflicto del agua en Cochabamba», en <www.geocities.com/laserna_r/agua.rtf>.

vos pero limitados resultados de las reformas.

Renacimiento del populismo

Bolivia no ha superado la ideología populista que se consagró como pensamiento oficial en 1952, rompiendo las ataduras de una oligarquía excluyente y formando un Estado patrimonial corporativo que simuló ser «de bienestar» mientras dispuso de los excedentes de exportación. Pero ha sido desde entonces una ideología que no ofrece ni facilita la formación de propuestas que superen el corto plazo, cobijando una práctica que mantiene al país en una extenuante indefinición política, y agotando sus recursos en ilusorios mecanismos de redistribución.

La trampa populista nos ha llevado a los bolivianos a mentirnos a nosotros mismos, hiriéndonos y desperdiciando las pequeñas y limitadas oportunidades que tenemos. Queremos capitalismo a la hora de consumir pero no a la de trabajar o invertir; queremos democracia al reclamar derechos pero no al asumir obligaciones; queremos un Estado social fuerte y capaz de protegernos, pero no estamos dispuestos al aporte tributario. Y seguimos aferrados a la convicción de que no hay riqueza fuera de la que ya se encuentra en la naturaleza y, por tanto, no hay

2. Esta idea, esencialmente fisiocrática, es sustentada por quienes enarbolan un discurso marxista, ignorando la teoría del valor trabajo y las conclusiones de Marx acerca de los modos de producción comunitarios, domésticos y mercantiles.

otra forma de resolver la pobreza que no sea mediante su distribución².

Cuando se quebró el abusivo sistema latifundista que prevalecía en el agro y se distribuyeron las tierras, en los años 50, se crearon propietarios «de mentiras»: tenían el derecho de usufructo pero no de propiedad. Podían vender sus tierras pero solo a sus hijos, sobrinos o ahijados. Y así lo han hecho, en transferencias garantizadas por la comunidad y válidas solo en ese entorno. Esa reforma permitió que mejoraran las condiciones de alimentación y consumo de los pobladores rurales, pero al cabo de tres generaciones los «campesinos con tierra» son el grupo más pobre del país. Su productividad está estancada o declinando, las tierras se agotan por la erosión y la sobreexplotación, las inversiones en riego dependen de la caridad internacional, y se han empezado a perder variedades de cultivo creadas en cientos de años. En el paso al capitalismo nos quedamos con la pierna levantada.

Las grandes explotaciones de recursos minerales fueron estatizadas y el control de su excedente convirtió al Estado en el actor central de la economía. La inversión pública expandió la base productiva hacia los llanos y creó nuevas oportunidades de diversificación. Pero la corrupción y el clientelismo, y el control gremial, acabaron por privatizar las empresas estatales, y algunas absorbían subsidios enormes para mantener un sistema redistributivo

que apenas alcanzaba para sus propios trabajadores. Tuvimos un socialismo de minorías excluyentes.

En las inmensidades del altiplano, las montañas y los llanos se reproduce, callada pero firme, la resistencia comunitaria. Con la fuerza de la austeridad y una inagotable capacidad para recrear sus mitos, las comunidades indígenas se adaptaron a los ambientes políticos e institucionales con la misma eficacia con que lo hicieron por siglos a los ambientes naturales, igualmente hostiles y avaros con ellas. Los avances del mercado las han debilitado, pero también allí encontraron oportunidades para mantener o renovar lazos comunitarios. Ya no son lo que eran aunque se niegan a admitirlo, y en lugar de enfrentar su presente reinventan el pasado alimentando de nostalgia la confusión nacional.

En los enormes espacios de incertidumbre creados por esas tres dinámicas (limitado capitalismo, estatismo corporativo y resistencia comunitaria) y contribuyendo a que ellas se vinculen y coexistan, se ubican miles de artesanos, comerciantes, vendedores y transportistas que compiten despiadadamente con sus compadres y comadres por una fracción de mercado, recrean comunidades con el nombre de sindicatos y cooperativas, explotan como esclavos a sus trabajadores, sea por un jornal o por el privilegio de «aprender», se desviven por acumular y recibir ayuda del Estado, pero re-

pudian por igual el lucro capitalista y los deberes fiscales. Son los trabajadores del «sector informal» que valoran la independencia personal y la libertad de horarios, no se ven como patrones y disfrutan del juego, la fiesta y la amistad. Trabajan y viven en el mercado, pero su vida no se rige por las razones del intercambio, salvo cuando aspiran a consumir la oferta del mercado global.

Este sistema se mantiene en parte porque eludimos el debate sobre nuestro destino discutiendo procedimientos o salidas coyunturales a las sucesivas crisis que nos agobian. El papel del Estado o del mercado, las formas de participación política, la ingeniería electoral o la revisión de leyes y normas, incluyendo la Constitución, son temas laterales hacia los que desviamos demasiadas energías. Pero las consecuencias de esa lucha tienen efectos materiales de gran impacto en la vida de la gente como lo prueban las dos «guerras» que ilustran el surgimiento de este nuevo populismo conservador y antidemocrático.

El conflicto y las «guerras»

Las dos «guerras» fueron muy similares en su forma. Ambas atrajeron a diversos actores y grupos sociales y de presión, y movilizaron a la población en acciones masivas contra el Gobierno, pero al final concentraron su atención en proyectos de inversión convertidos en objetos simbólicos. La «captura» de

esos objetos fue el signo de una victoria que, a la larga, dañaría los intereses de los movilizadados. Ya pueden verificarse las consecuencias nefastas de la «guerra del agua» para los pobres de Cochabamba, que a dos años y medio de su victoria siguen sin el recurso ni posibilidades cercanas de obtenerlo. La «guerra del gas» ha debilitado la posición negociadora del Gobierno en un mercado muy complejo y competitivo, en el cual Bolivia solamente tiene la ventaja de la abundancia y todas las desventajas de la distancia y la inestabilidad³.

Más allá de las similitudes anecdóticas, ambos eventos permiten observar de qué manera y con qué fuerza se ha ido gestando un movimiento populista conservador, que articula nostalgias comunitaristas y estatistas, para enfrentar el proceso de apertura social y modernización democrática que no ha llegado a consolidarse a pesar de sus notables avances y logros.

Parte de ese mismo conflicto son los bloqueos campesinos de septiembre de 2000, las continuas protestas de los campesinos productores de coca, y la «revuelta de la desconfianza» que en febrero de 2003 repudió un proyecto de reforma fiscal que apuntaba a crear un impuesto directo a los ingresos; también lo son los resultados electorales y las miles de decisiones de trabajo y consumo que la gente toma cada día expresando con ellas dudas y aspiraciones.

Entre abril de 2000 y octubre de 2003 se observó también que la violencia de las movilizaciones fue creciendo y tendió a sobrepasar la capacidad de control del Gobierno, cuyas fuerzas policiales y militares cuentan con recursos limitados, cayendo rápidamente en la torpeza y reproduciendo la violencia. Pero también parece haber aumentado el desconcierto de la población, como lo demuestra la volatilidad de su comportamiento político. La «guerra del agua» se libró apenas semanas después de que la misma población que bloqueaba las calles votara masivamente por el alcalde que impulsaba el proyecto del agua; y las elecciones de 2002 no afectaron mayormente el curso del conflicto pese a que, limpias y pacíficas, dieron lugar a una coalición de mayoría suficientemente amplia como para controlar el Congreso y el Ejecutivo.

Esto revela no solamente un problema grave de distanciamiento entre el liderazgo político y los partidos con res-

3. El proyecto de exportación de gas no ha sido siquiera completado, por lo que el rechazo es «preventivo» y basado en especulaciones y datos incompletos. Lo que se sabe es que el país tiene enormes reservas de gas, un crónico déficit comercial y la imperiosa necesidad de mantener la inversión social sin depender de las donaciones externas.

4. No son un dato superfluo los nombres utilizados por campesinos y migrantes rurales para bautizar a sus hijos, que en gran proporción son ingleses, denotando un deseo de acercamiento a las tendencias globales dominantes. Pero de esos mismos sectores provienen demandas de retorno a la comunidad étnica o de respaldo a acciones de repudio a la globalización y a la inversión extranjera.

pecto a la población, sino también una profunda escisión interna entre los comportamientos individual y colectivo de mucha gente. En la serenidad de la urna la decisión política es una, y muy diferente a la que conduce el entusiasmo de la asamblea o la pasión callejera⁴.

De ello son también responsables las elites intelectuales y políticas del país, incluyendo por supuesto los partidos, que no pudieron ejercer un liderazgo consistente. No me refiero a la falta de un líder sino a la formación de una convicción colectiva que otorgue la energía necesaria a un grupo para convencer a los demás de que vale la pena apoyar sus iniciativas o, cuando menos, aceptarlas. Facciones importantes de los partidos que ejercieron el gobierno desde 1985 fueron reluctantes a la hora de apoyar las reformas, atribuyéndolas con frecuencia a la presión externa o escudándose en ella. Ya cuando se iniciaba la etapa más vigorosa, en 1994, destacamos que la mayor debilidad de las iniciativas de cambio era que carecían de sustento social⁵. No habían actores capaces o con voluntad de hacer suya la participación popular o la reforma educativa, y mucho menos la capitalización⁶. Por eso, mientras los gremios se organizaban para impedirlos con el fin de preservar sus privilegios, los beneficiarios no las apoyaban, tal vez porque no lograban percibir los resultados de esas transformaciones, o desconfiaban de la posibilidad de que se logren.

Este problema se agravó durante el gobierno de Hugo Bánzer, que se organizó sin debate ni negociación de por medio y sin plantearse si de verdad querían asumir o dismantelar las reformas. Las administraron a desgallo, sin convicción ni seguridad, y más bien con muchas dudas. Esa sensación se transmitió hacia el país generando el malestar que abrió espacios al renacimiento del populismo. Los empresarios se mostraban inseguros de modernizar el capitalismo y competir adentro o afuera. Muchos intelectuales confundieron independencia y objetividad con equidistancia, y se hicieron eco de las reivindicaciones populistas recogiendo sin crítica. Los medios de comunicación amplificaron las confusiones con líneas contradictorias entre lo que postulaban sus editoriales y lo que informaban sus periodistas.

Al final no había un actor social o políticamente relevante que defendiera los avances producidos, porque en el fondo no existía el convencimiento de que valiera la pena hacerlo. Unos aceptaban las mejoras en un lado pero no las reconocían en el otro, de modo que el todo no alcanzaba a ser visto salvo como una entelequia que nadie definía: «el modelo neoliberal», algo que

5. V., en particular, Fernando Calderón y Roberto Laserna (eds.): *Paradojas de la modernidad*, Fundación Milenio / Los Amigos del Libro, La Paz, 1994.

6. Además, los grupos que impulsaban cada iniciativa se concentraban en ella y se distanciaban de las demás sin buscar ni comprender su integralidad.

resultaba fácil de atacar pues cada uno la construía a su (dis)gusto y no tenía defensores.

Quizás no fuera ni siquiera falta de convicción sino miedo a contradecir la «vox populi», elevada a la condición de «vox Dei», como afirma la máxima populista. En el límite de los conflictos, esta ideología terminó imponiéndose al impedir que se considerara siquiera la posibilidad de que el pueblo podía hacerse daño a sí mismo. En ese sentido, a pesar de que los traumáticos resultados de la «guerra del agua» podían comprobarse a más de dos años de ocurrida, el análisis del ascenso populista se redujo a la repetición de los discursos que lo justificaban y a la reiteración acrítica de las acusaciones «al modelo», dando legitimidad y validez a la reacción conservadora que se empezó a movilizar contra las reformas democráticas. Una reacción que se hace cada día más virulenta e intolerante.

Avances de la democracia

Una mirada superficial ha explicado la actual crisis política afirmando que la modernización liberal iniciada en 1985 dio estabilidad pero aumentó la pobreza. Sin embargo los datos no respaldan ese argumento, sino que muestran avances no desdeñables dada la desventajosa posición del país y los problemas internacionales de los últimos años. Por ejemplo, en verdad la pobreza en Bolivia es enorme, alcanzando a 58% de la población según la metodo-

logía de Necesidades Básicas Insatisfechas, pero era peor y ha descendido, pues en 1992 llegaba a 71%. La desigualdad económica ha aumentado, pero no porque un grupo haya sido despojado de recursos en favor de otro, sino porque el crecimiento ha sido impulsado por los sectores más modernos y sus frutos se han concentrado en ellos. Así, se ha producido un distanciamiento mayor entre las ciudades más integradas al mercado y las áreas rurales más tradicionales y aisladas.

La urbanización ha sido clave en la reducción de la pobreza, dado que los migrantes tienen acceso a mayores oportunidades de educación, salud y empleo. Su insatisfacción se explica porque en la ciudad son también más visibles las desigualdades, sobre todo entre los sectores más organizados empresarialmente y con tecnologías de mayor productividad, y los informales que se basan en el trabajo familiar de pequeña escala. Considerando la débil integración del mercado entre todos estos sectores resulta inapropiado plantear que las desigualdades aumentaron como consecuencia de las reformas, porque todo indica más bien que fue la falta de continuidad o de fuerza en su aplicación la que ha permitido que amplios grupos se mantengan aislados y ajenos a la dinámica de la economía abierta⁷.

7. Esto no niega el derecho de las comunidades indígenas a conservar sus tradiciones y su identidad, pero sí a reflexionar sobre las consecuencias económicas que tendría tal decisión. Salvo

Por eso mismo la tasa de crecimiento de la economía ha sido tan baja. Lo notable es que pese a ello todos los indicadores sociales muestren progresos sustanciales en los 21 años de democracia y sobre todo desde la aplicación de las reformas. En las dos últimas décadas la mortalidad infantil se redujo a la mitad, aumentó la cobertura escolar en todos los ciclos, así como también la de los servicios de agua y saneamiento básico, electricidad y telefonía. También se multiplicaron considerablemente los canales y mecanismos de participación social y política. En el nivel local los ciudadanos pueden participar individualmente mediante el voto en la formación de los concejos, y colectivamente a través de sus organizaciones en el funcionamiento de los comités de vigilancia. Las prefecturas tienen consejos integrados por representantes municipales y el sistema electoral se ha perfeccionado con la papeleta multicolor y la combinación de diputados uninominales, elegidos por mayoría simple en la jurisdicción, y plurinominales elegidos por lista y respetando la proporcionalidad del voto. Además hay más y mejores mecanismos de protección al ciudadano, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y todo un nuevo sistema judicial abierto a la participación ciudadana y mucho más respetuoso de los derechos de las personas⁸.

Estos logros, importantes aún con sus imperfecciones, no fueron fruto de la inercia sino resultado de las reformas

institucionales y de una voluntad política, nacional e internacional, que aumentó la inversión pública orientándola hacia las áreas sociales. Para ello fue clave que el Estado se liberara de las obligaciones de la presión corporativa que le llevaba a subsidiar la ineficiencia y la corrupción en las empresas públicas.

Problemas de la democracia

La reforma del Estado lo ha distanciado de la sociedad, como lo observan frecuentemente autores y analistas. Pero mientras la mayor parte sostiene que ese divorcio es un problema del ámbito político, y en particular de los partidos, lo cierto es que también resulta de la persistencia de hábitos clientela-

que se reconstruya totalmente la «cultura nativa», que supone usar la tradición con pragmatismo.

8. Un detalle analítico y descriptivo de lo ocurrido en los últimos 20 años, desde el punto de vista de los derechos humanos, será pronto publicado por el Defensor del Pueblo. Un borrador inicial fue distribuido en formato digital con el título «Estudio sobre Derechos Humanos en Bolivia», La Paz, 2003.

9. Los fondos de pensiones son manejados por administradoras privadas; un tercio de los ingresos tributarios va directamente a las municipalidades y universidades; el Banco Central es más autónomo y el Gobierno ya no puede emitir dinero con tanta facilidad para financiar su déficit con inflación; la mayor parte de las empresas públicas han sido privatizadas o capitalizadas; los presupuestos públicos deben ser aprobados por órganos colegiados; los servicios públicos son supervisados por entidades autónomas; y hay una legislación más restrictiva de control fiscal así como una Contraloría más independiente. No es que todo esto funcione con eficiencia, pero lo que sí ha logrado es limitar considerablemente las posibilidades de un manejo arbitrario de los recursos públicos.

res en la sociedad, que no pueden ser satisfechos por el Estado debido a que ya no es posible manejar los recursos públicos con la discrecionalidad de antes⁹. El desarrollo democrático no fue acompañado por el fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana. La noción de ciudadanía todavía se sigue definiendo en Bolivia como una condición que disfruta derechos, sin vínculo ni contraparte en obligaciones. Los impuestos, signos económicos de compromiso público, son todavía evadidos y hasta rechazados apelando a la compasión por la pobreza. La revuelta de febrero de 2003, que se inició con una rebelión policial seguida de saqueos en las ciudades de La Paz y El Alto, fue motivada por un proyecto de modificación del sistema tributario que se proponía iniciar un cambio del sistema para reducir la importancia de los impuestos indirectos, que son en general regresivos, por impuestos directos al ingreso personal. La tasa propuesta era constante, pero se proponía gravar los ingresos luego de haber deducido una suma que liberaba del tributo a una parte significativa de los trabajadores, lo que lo convertía en los hechos en un impuesto moderadamente progresivo. Sin embargo, el rechazo fue tan violento que el Gobierno se vio obligado a retirar su proyecto antes incluso de que el Parlamento pudiera considerarlo.

En consecuencia, no es que no se hayan logrado progresos en estos 21 años de democracia, sino que las expectati-

vas resultan ser siempre mayores, pues además de recibir la influencia de los medios de comunicación son estimuladas por la lógica competitiva de la democracia que, en cierto modo, obliga a los candidatos a prometer para ganar. Esta interpretación no pretende ignorar que el conflicto actual entre populismo y democracia tiene como base un amplio y profundo malestar social en Bolivia. Las causas de este ánimo, sin embargo, son mucho más complejas de lo que parece y ciertamente se alejan de la simple correlación economicista que ha sido reiterada en reportajes y notas editoriales dentro y fuera de Bolivia.

Es un aspecto conocido que los conflictos sociales no emergen de situaciones dadas, por injustas o inequitativas que sean, sino de su visibilidad social y la percepción de que pueden modificarse. En ese sentido, son también evidencias del cambio social y político que se ha descrito anteriormente. Incluso, claro está, en relación con la cuestión étnica que está marcando con particular fuerza las revueltas y rebeliones de los últimos años. Es innegable que los indígenas de Bolivia han recorrido un largo camino desde el Congreso Indígenal de 1945, cuando se consideró un triunfo la abolición del trabajo servil por el gobierno del presidente Gualberto Villarroel. La reforma agraria de 1953 y el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen iniciado en 1992 son hitos importantes, pero más aún lo son los efectos que

ellos y otras políticas públicas han tenido en las vidas de millones de personas que se han incorporado al comercio, la industria, el transporte, la educación y la política. Hay desigualdades que coinciden con las diferencias étnicas y sin duda persisten también comportamientos discriminatorios, pero ellos no solamente ya no tienen respaldo legal sino que desde el Estado se han desarrollado políticas destinadas a combatirlos. Es justamente por eso que la historia de la discriminación y sus manifestaciones remanentes son más visibles para las nuevas generaciones de aymaras y quechuas que viven en las ciudades, que van a la escuela y a la universidad y tienen un creciente grupo de intelectuales comprometidos con el rescate de sus tradiciones y la denuncia de su pasado de explotación. En esta perspectiva, no es casual que El Alto, ciudad formada por migrantes rurales de origen aymara, se haya convertido en un escenario crucial de la protesta. Un importante sector del movimiento indígena, liderado por Felipe Quispe, intenta radicalizar esa perspectiva asumiendo como propia la humillación de sus abuelos e idealizando la tradición rural y comunitaria¹⁰.

10. La propuesta del grupo de Quispe (Movimiento Indígena Pachacuti - MIP) tiene una tensión no resuelta. Por un lado es de orientación esencialmente conservadora, pues se propone recuperar el mundo perdido con la conquista española, pero aspira al mismo tiempo a la mecanización del agro con la incorporación de maquinaria de última tecnología. Ver su entrevista en *La Razón* (3/11/03) y los pliegos petitorios que plantea al Gobierno.

Su discurso, curiosamente, ha encontrado un eco extraordinario en los sectores medios y altos de La Paz que, tal vez desde un sentimiento de culpa por la ubicación comparativamente privilegiada que tienen, otorgan legitimidad a una protesta que los amenaza de manera explícita.

Finalmente, una fuente inagotable de problemas relacionados con el proceso de reformas democráticas en Bolivia ha provenido del exterior, de gobiernos que se definen como aliados y de organizaciones supuestamente creadas para cooperar con los gobiernos. Los gobiernos de los países de la OCDE han otorgado recursos de cooperación que podrían considerarse generosos si no hubieran estado acompañados de presiones y condicionamientos de diversa índole, y de una persistente actitud de proteccionismo respecto de sus mercados, particularmente a favor de sus productores agrícolas. En esto Bolivia comparte la misma situación desventajosa de muchos otros países que abren sus mercados pero encuentran cerradas las puertas de los demás. Este doble juego ha sido más fuerte y evidente en el caso de Estados Unidos, por la relevancia que tiene la política prohibicionista de drogas psicoactivas. La presión para erradicar los cultivos de coca ha afectado severamente la capacidad económica de miles de campesinos, y del país en su conjunto, sin que las inversiones en desarrollo alternativo hubieran logrado compensar las pérdidas a pesar de

sus limitados avances, pero más importante aún ha sido el impacto político de esa presión, que ha fortalecido la organización sindical de resistencia a la erradicación creando uno de los componentes más vigorosos del movimiento populista. Vigoroso porque conforma un núcleo social denso, bien organizado y localizado en el eje central de comunicaciones y transporte del país, pero además porque puede proyectar con facilidad un testimonio de defensa nacionalista y de rechazo a la intervención extranjera capaz de atraer a otros grupos sociales, especialmente de sectores medios urbanos. La diplomacia de EEUU no parece haber comprendido los efectos de su intervención y la hace explícita con frecuencia logrando efectos contrarios a los que dice buscar¹¹.

No menos importantes son las presiones provenientes de la tecnocracia económica, y en particular del FMI, que condicionan su aval y los recursos financieros que se les requieren al cumplimiento inflexible de metas. Un caso muy claro es el referido al manejo del déficit fiscal¹². Otro condicionamiento fue el de llevar a cabo diálogos participativos en el diseño de la «Estrategia contra la Pobreza», necesaria para acceder al alivio de la deuda. Más allá de los méritos o las críticas a los diálogos nacionales de 1997 y 2000, su efecto fue debilitador para el sistema institucional democrático. Esos mecanismos expresaron desconocimiento a la representatividad de los organismos de-

mocráticos, como el Parlamento y los cons/cejos, generando espacios de afirmación corporativa y dando impulso a una nueva expansión de expectativas en la población, especialmente en la más pobre. Este conjunto de problemas de la democracia explican la fuerza con que emergió desde la «guerra del agua» el movimiento populista, que no tuvo al frente un adversario que defendiera la democracia a partir de los logros que ella misma había permitido.

En las elecciones de 2002 la disputa electoral básica entre todos los candidatos, salvo Sánchez de Lozada, se dio por ocupar el espacio de «crítica al modelo» y tratar de aprovechar el renovado impulso populista. Más allá de los votos, lo que lograron fue alimentar y fortalecer ese impulso en detrimento de la inconclusa modernización

11. El embajador estadounidense Manuel Rocha creó un movimiento de solidaridad en apoyo a Evo Morales cuando respaldó su desafuero primero y amenazó con sanciones si ganaba las elecciones. Fue el impulso final que necesitó este dirigente para alcanzar el segundo lugar en la votación de 2002. En octubre el embajador David Greenlee declaró que su gobierno no aceptaría la sustitución de Sánchez de Lozada, pero eso fue interpretado más bien como un desafío por una gran parte de la población que se sumó al pedido de renuncia.

12. La reforma de pensiones ha hecho que la deuda adquirida por el Estado con los aportantes sea transparente y calculable. No es una deuda nueva ni por tanto es nueva la obligación de pagarla. Pero no solamente se ha negado al Estado la posibilidad de tratarla como deuda, sino que se le obliga a contabilizarla como gasto corriente, inflando el déficit fiscal de una manera tan exagerada que se imponen reducciones recesivas al gasto cuando lo que la economía requiere es exactamente lo contrario.

democrática¹³. Después de la revuelta policial y los saqueos de febrero de este año, los obispos católicos hicieron un esfuerzo ordenado de concertación y diálogo. El grupo de Quispe rechazó la iniciativa en tanto que el MAS, organizado en torno de los cocaleros, optó por aprovechar la oportunidad que ofrecía el proyecto del gas para fusionar con la demagogia todos los temores. No le fue difícil agitar los sentimientos nacionalistas más elementales porque bastó el recuerdo del mar perdido (Chile), la coca erradicada (EEUU) y los minerales agotados (exportación y transnacionales) para convertir el malestar en una fuerza política de rechazo a la globalización y a lo que condujera hacia una sociedad abierta. Y ante la ausencia de un programa, concentrar todos los fuegos en la persona

del presidente cuya renuncia, indudablemente, ha debilitado el sistema.

El conflicto no ha terminado. Hoy en Bolivia el movimiento populista y comunitario se ha acercado al poder, aunque no alcanzó a ser gobierno. Su debilidad radica en que tiene un núcleo heterogéneo que se mantiene unido en el rechazo, y en que solamente logra un apoyo amplio con banderas demagógicas. A pesar de ello, tendrá capacidad de bloquear el proceso de modernización democrática mientras no surja un liderazgo que logre convencer a los bolivianos de que valió la pena recorrer lo avanzado y que el desarrollo solo puede lograrse con un esfuerzo continuo y persistente. Caso contrario, la ilusión, que se confunde fácilmente con la esperanza, puede volver a capturar la imaginación política y agotar las energías populares en una nueva frustración.

13. Ningún candidato eludió la tentación populista. Solamente Ronald MacLean, de ADN, defendió el proceso, como lo hiciera, desde otra perspectiva, Miguel Urioste del MBL en 1997. La magra votación que ambos obtuvieron era un signo de alerta que el resto ignoró.

Princeton, noviembre de 2003

AMÉRICA LATINA, HOY

Revista de Ciencias Sociales

Abril 2003

Salamanca

Nº 33

MÉXICO: **Ernesto Hernández Norzagaray**, Sistema electoral y sistema de partidos en México (1994-2000). **Águeda Gómez Suárez**, La narración política del Movimiento Zapatista. **Mauricio Merino**, México: la transición votada. **José Francisco Parra**, Acercamiento al derecho de la migración y la ciudadanía transnacional. El caso de los emigrantes mexicanos y sus derechos políticos. **Adriana Borjas Benavente**, La campaña presidencial de Vicente Fox y el modelo propagandista de comunicación política. VARIA: **Eli Diniz**, Empresariado, Estado y políticas públicas en Brasil: nuevas tendencias en el umbral del nuevo milenio. **Marcello Baquero**, Capital social y cultura política en Brasil: posibilidades y límites.

América Latina, Hoy. *Revista de Ciencias Sociales. Políg. Ind. El Montalvo, Salamanca. Telefax: 923 19 02 13, e-mail: <eus@gugu.usal.es>*.